



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE:	JORGE HUMBERTO TABARES TORRES
DEMANDADO:	COLPENSIONES
RADICADO:	0500103105 006 2018 00582 01

ACTA N°: 59

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por JORGE HUMBERTO TABARES TORRES en contra de COLPENSIONES, para pronunciarse en virtud del **RECURSO DE APELACIÓN** del **DEMANDANTE** frente a la sentencia con la cual el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 59** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

El demandante pretende con este proceso se le DECLARE beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia se CONDENE a COLPENSIONES al pago de la pensión de vejez a partir del 15 de agosto de 2015 de acuerdo con lo establecido en el Decreto 758, intereses moratorios y costas. Para sustentar sus pretensiones afirmó, en síntesis: **i)** JORGE HUMBERTO TABARES TORRES nació el 15 de agosto de 1955 y para el 1 de abril de 1994 había cotizado 820 semanas, es decir más de 15 años cotizados, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y cumple con el requisito de semanas requerido en el Decreto 758 de 1990. **ii)** Solicitó ante COLPENSIONES reconocimiento de la pensión aplicando el régimen de transición, pero fue denegada mediante resolución GNR 412900 del 21 de diciembre de 2015 señalando que el régimen

¹ Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Págs. 2 – 10 y 61 – 65

de transición expiró en el año 2014. **iii)** Se entiende agotada la reclamación administrativa con el escrito de fecha 10 de febrero de 2017.

2. CONTESTACIÓN DE COLPENSIONES²

La entidad se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones contenidas en el libelo petitorio de la demanda por carecer de fundamentación legal y fáctica. Pidió se condene en costas a la parte actora en favor de la entidad, quien no incumplió ninguna obligación legal debido a que al DEMANDANTE le expiró el régimen de transición, pues si bien cumplía los requisitos para ser beneficiario no alcanzó a cumplir la edad antes del 31 de diciembre de 2014.

Propuso como excepciones: INEXISTENCIA DEL DERECHO DEL DEMANDANTE AL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN POR LA EXPIRACIÓN DEL MISMO, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA³

Mediante sentencia del **16 de septiembre de 2020⁴** la Juez ABSOLVIÓ de todas las pretensiones argumentando básicamente que, si bien el actor en principio fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100, al cumplir los 60 años de edad en el año 2015, no acredita el derecho a la pensión de vejez aplicando el Decreto 758 de 1990 en virtud de lo definido en el AL 1 de 2005. Fue así como CONDENÓ en COSTAS a la parte actora.

4. RECURSO DE APELACIÓN⁵

El apoderado solicita la revocatoria de la sentencia, insistiendo en la tesis planteada en la demanda, que se concreta en síntesis, en lo siguiente: i) El demandante adquirió el derecho al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por haber tenido más de 15 años de servicio o su equivalente en semanas al 1 de abril de 1994, y se trata de un derecho adquirido de acuerdo con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005 inciso 9, citando además la sentencia C 243 de 2009. ii) Resalta las prerrogativas para acceder a la pensión de vejez con base en la normatividad anterior se concibió como una expectativa legítima en los términos del artículo 36 de la Ley 100. E Invoca la aplicación del principio de proporcionalidad porque el demandante cumplió con el requisito más difícil, que es el de las semanas cotizadas. Y el principio del derecho que nadie está obligado a lo imposible, señalando que en el Acto Legislativo 01 de 2005 existe un vacío legal y al restringir el acceso a la pensión con base

² Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Págs. 89 – 94

³ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 08ActaAudienciaCompleta

⁴ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 07AudienciaCompleta / Min. 49:54 – 51:00

⁵ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 07AudienciaCompleta / Min. 51:16 – 58:15

en el régimen de transición al 31 de diciembre de 2014 cercenó el derecho de quienes adquirieron el régimen de transición por haber cumplido el requisito de las semanas cotizadas. iii) Finalmente, apela a la aplicación del principio de igualdad y resalta que respetar el derecho a aquellas personas que tienen régimen de transición por tiempo de servicio no afecta la aludida sostenibilidad financiera del sistema, pues no es infinito el número de personas que obtuvieron el régimen de transición por tiempo de servicio, y se trata de personas que cotizaron un número considerable de semanas para adquirir y financiar su derecho pensional.

5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia, los apoderados de ambas partes intervinieron oportunamente:

5.1. ALEGATOS COLPENSIONES⁶

El apoderado solicita se confirme la decisión absolviendo a COLPENSIONES de las pretensiones incoadas, afirmando que el demandante no conserva el régimen de transición porque independiente de las cotizaciones realizadas al 01 de abril de 1994, si no se configuró el derecho a la pensión de vejez con anterioridad al año 2014, dicho régimen no se le hace extensible a ninguna persona por su edad o cotizaciones. Invoca la aplicación de la sentencia T-798/12 de la que transcribe algunos apartes.

5.2. ALEGATOS DEMANDANTE⁷

El apoderado reitera los planteamientos esbozados en las alegaciones de primera instancia y en el recurso, insistiendo en que el demandante adquirió el derecho al régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por haber tenido más de 15 años de servicio o su equivalente en semanas al 1 de abril de 1994, y se trata de un derecho adquirido de acuerdo con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso en virtud del **recurso de apelación** interpuesto por el demandante. Así, el problema jurídico es: **¿Resulta procedente afirmar, que en este caso se acredita el derecho a la pensión de vejez del actor como beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 aplicando el Decreto 758 de 1990; si cumplió los 60 años de edad con posterioridad al 31 de diciembre de 2014?**

⁶ Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 16. 006 2018 00582 Alegatos COLPENSIONES

⁷ Carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 18. 006 2018 00582 Alegatos DEMANDANTE

6. CASO CONCRETO

La decisión ABSOLUTORIA proferida el **16 de septiembre de 2020** se sustenta en un argumento central: De acuerdo con el AL 1 de 2005, el señor **TABARES TORRES** no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de la vejez aplicando el Decreto 758 de 1990, porque cumplió los 60 años de edad después del 31 de diciembre de 2014.

Para efectuar el análisis, esta corporación verifica en el acervo probatorio los siguientes aspectos relevantes:

- El actor nació el **15 de agosto de 1955**⁸, inició su actividad laboral con cotizaciones al I.S.S. a partir del mes de agosto de 1973, por lo que para el 1 de abril de 1994 fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones en su caso, tenía solo **38 años de edad** pero **820 semanas**⁹, cumpliendo el requisito de 15 años de servicios exigidos por el artículo 36 de la Ley 100, lo que lo hace en principio destinatario del régimen de transición
- Solicitó por primera vez la pensión de vejez el **25 de septiembre de 2015**. La prestación fue denegada con **Resolución GNR 412900 de 21 de diciembre de 2015**, acto administrativo en el que se reconocen 1929, pero se analiza el derecho a la luz del artículo 9 de la Ley 797 y para ese momento solo contaba con 60 años de edad:

En el caso en estudio el peticionario si bien cumple con la densidad de semanas requeridas por la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003, no cumple con la edad mínima que para el año 2015 es 62 años de edad, razón por la cual se va a proceder a negar la prestación incoada y así se hará saber en la parte resolutive de este acto administrativo

- Volvió a solicitar la pensión de vejez el **23 de agosto de 2017**¹⁰. Mediante Resolución **SUB 278068 de 1 de diciembre de 2017**¹¹ se le reconoció la prestación por cumplir los requisitos consagrados en el artículo 9 de Ley 797 de 2003 desde el **1 de diciembre de 2017** en cuantía de **\$2.958.379**, con una tasa de **77,93%** sobre un IBL de **\$3.796.201**.
- Contra el acto administrativo el apoderado interpuso recursos¹² con el fin de que se reconozca el derecho como beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para que de este modo se aplique en su caso el Decreto 758 de 1990 que le permitiría acceder a una tasa del 90% por acreditar 2.028 semanas cotizadas.

⁸ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Pág. 35

⁹ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Pág. 16 - 27

¹⁰ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Págs. 36 – 37

¹¹ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Págs. 115 – 120

¹² Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Págs. 52- 54

Pues bien, debe la Sala anunciar que comparte en su integridad el análisis efectuado en la providencia que se revisa, porque no es objeto de discusión en este proceso que el actor cumplió el requisito mínimo de edad consagrado en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 el **15 de agosto de 2015**¹³. Significa lo anterior que, aunque para la entrada en vigencia del **Sistema General de Pensiones**, en su caso **1 de abril de 1994**, tenía más de 15 años de servicios y para la entrada en vigencia del AL 1 de 2005 contaba con más de 750 semanas cotizadas¹⁴, sin embargo, no causó el derecho pensional antes del 31 de diciembre de 2014.

Y en relación con los argumentos planteados en el recurso de apelación, debe señalarse por la Sala lo siguiente: En primer lugar, es claro que en el **AL 01 de 2005** se estableció en relación con el artículo 36 de la Ley 100:

"Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia **C - 754 de 2004**, no podía **mediante una nueva ley** modificarse los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque se violaba en su momento la Constitución Política, introduciendo la noción de expectativa legítima, distinta a la de derecho adquirido y mera expectativa. En esa oportunidad la Corte Constitucional que los hombres quienes hubiesen cumplido con los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 a la entrada en vigencia del sistema, habían consolidado el derecho a que se les respetaran los requisitos de edad, tiempo y monto del régimen anterior al que se encontraban afiliados a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones (**artículo 58 de la CP**). Se trató de un pronunciamiento en el que se utilizó de manera absoluta el principio de progresividad y no regresividad en materia de pensiones, al concluir que las personas cobijadas por un determinado régimen de transición pensional tienen derecho a que se le respeten las condiciones establecidas aun existiendo cambio de legislación. Pero no puede concluirse que, en razón de lo definido en este pronunciamiento, hubiese quedado incólume el derecho al beneficio del régimen de transición para todas las personas, porque éste sólo se encuentra referido a modificaciones de carácter legal, y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

¹³ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Pág. 35

¹⁴ Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 01Expediente201800582 / Pág. 16 - 27

Es la aplicación de la primacía constitucional consagrada en el artículo 4 de la Carta Política, lo que impide continuar aplicando el artículo 36 de original de la Ley 100, por tratarse de una norma de inferior jerarquía que fue modificada expresamente en su texto por una norma constitucional, que restringió su alcance y aplicación.

Este aspecto ha sido ampliamente en nuestra jurisprudencia nacional en sentencias como la **SU 023 de 2018: i)** En ella se efectúa el análisis de la modificación introducida al artículo 36 de la Ley 100 con el Acto Legislativo 01 de 2005 y la grave situación financiera del sistema pensional colombiano para ese año, para finalmente concluir que el criterio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones en conjunto con principios constitucionales de la seguridad social como la universalidad y la solidaridad, justifican la medida relacionada con la limitación temporal del régimen de transición. **ii)** Se concluyó así que conforme la insostenible situación financiera del sistema que venía desde mucho antes de la Constitución de 1991, y a la forma como se fue agravando en los años siguientes, se hacía imperiosa la reforma constitucional, introduciendo diversas modificaciones, entre ellas, limitando en el tiempo la aplicación de los beneficios del régimen de transición que permitía el reconocimiento de pensiones con requisitos más favorables a los introducidos en la nueva ley. **iii)** Y que el AL 01 de 2005 no vulneró el principio de la no regresividad de los derechos sociales, que no es absoluto, y debe ceder cuando se trata de circunstancias y hechos que justifican el retroceso con miras a resguardar el sistema de seguridad social en su conjunto.

Estos criterios se han mantenido en múltiples sentencias posteriores, en las que ha dejado sentada la validez de las diferentes modificaciones introducidas al artículo 36 de la Ley 100 con el Acto Legislativo 01 de 2005, y en los mismos términos, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la **SL13673-2016, SL3080-2018, SL5157-2018, SL5374-2018, SL 1349-2019, SL 841-2019, SL 2570-2019** y más recientemente en la **SL 453-2023**, en la que respecto al argumento del recurrente sobre los derechos adquiridos señala:

“Para dar respuesta a los cuestionamientos del recurso extraordinario, en que se pretende asimilar el beneficio de la transición a los derechos adquiridos, se hace menester recordar lo establecido en la sentencia CSJ SL2571-2021 reiterativa de la SL1347-2019, en la que se expuso:

De los regímenes de transición y los derechos adquiridos.

Esta Sala ha adoctrinado que los regímenes de transición son herramientas que evitan que los afiliados a un sistema pensional, caigan en arbitrariedades producto de la libertad de la configuración legislativa. Por tal motivo, las modificaciones al sistema jurídico que establece los criterios para acceder a beneficios pensionales, no pueden, por regla general, introducir abruptamente nuevas condiciones sin la consideración de los afiliados próximos a adquirir el *status* de pensionados. Lo anterior, se refuerza si se tiene en cuenta que la seguridad social está catalogada como derecho fundamental según lo consagra el artículo 48 de la Constitución Política y, por su parte, el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos

Económicos y Culturales, que impide regresiones en los estándares de protección, sin la mediación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad (CSJ SL16786-2017).

Ahora, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones -1.º de abril de 1994- tuvieran 35 o más años de edad en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad en el de los hombres o 15 o más años de servicios cotizados, podrán alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen al que se encontraban adscritos antes de esa fecha; dichas personas podían acceder a tales prerrogativas con el cumplimiento de una o de ambas condiciones.

De esta forma, la citada norma previó una transición ante la vigencia del sistema general de seguridad social ya que protegió a un grupo de afiliados que por su edad o densidad de cotizaciones, tenían la posibilidad cercana de causar una pensión bajo las reglas de regímenes anteriores.

No obstante, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de esa transición normativa, de ninguna manera puede considerarse como un derecho adquirido. Sobre ese concepto, esta Corporación sentó que *«se entiende que hay un derecho adquirido cuando una persona ha satisfecho la totalidad de los requisitos que establece la ley, es decir, es aquél (sic) que ha entrado en el patrimonio de aquella»* (CSJ SL4650-2017).

Quiere decir lo anterior que solo la consolidación del derecho pensional, por el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas o tiempos de servicio, según la norma que lo regule, causa su inmutabilidad frente a las normas que se produzcan posteriormente. Al contrario, si el afiliado tiene un derecho en formación porque aún no cumple con las exigencias de la ley para causarlo, solo goza de una *expectativa*, concepto que, como se explicó, no corresponde al de derecho adquirido".

Es el conjunto de consideraciones precedente el que lleva a la Sala a concluir que el derecho pensional del demandante no puede analizarse a la luz de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 en concordancia con el 12 y 20 del Decreto 758 de 1990.

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse que al no salir adelante el recurso de apelación se causan en contra de la activa, y se fija el valor de las agencias en derecho en la suma de ½ s.m.l.mv

7. LA DECISIÓN

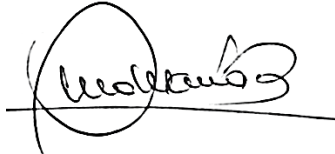
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Se CONDENA en costas en esta instancia al DEMANDANTE. Valor de las agencias en derecho ½ s.m.l.mv

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

RADICADO: 050883105 006 2018 00582 01

SENTENCIA del //27/07/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR:
<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Et17ZxkpaNVAuFQdv-zPYqwbZrq4d9Ote-bnpyqJvIVUeg?e=ADr4Fc](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Et17ZxkpaNVAuFQdv-zPYqwbZrq4d9Ote-bnpyqJvIVUeg?e=ADr4Fc)